

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS c/ VANZINI S.R.L. -APREMIOS FISCALES- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Cita: 191/26

Nº Saij:

Nº expediente:

Año de causa:

Nº de tomo: 2026

Pág. de inicio: 0

Pág. de fin: 0

Fecha del fallo: 07/04/2026

Juzgado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Santa Fe) - Santa Fe

Jueces

Jorge Camilo BACLINI

Daniel Aníbal ERBETTA

Roberto Héctor FALISTOCCO

Rafael Francisco GUTIERREZ

Eduardo Guillermo SPULER

Rubén Luis WEDER

Margarita Elsa ZABALZA

Jurisprudencia relacionada

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS c/ VANZINI S.R.L. -APREMIO FISCAL- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD /// CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 26/11/2024; Fuente Propia; ; 1002/24

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > ADMISIBILIDAD

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > SENTENCIA DEFINITIVA

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > SENTENCIA. DEFINITIVIDAD

Tesouro > SENTENCIA DEFINITIVA

Tesouro > SENTENCIA > DEFINITIVIDAD

Tesouro > APREMIO FISCAL > EJECUCION

Tesouro > EJECUCION FISCAL

Tesouro > JUICIO > DEMANDADO

Tesouro > PARTES EN EL PROCESO > DEMANDADO

Tesouro > VIA RECURSIVA

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION CONSTITUCIONAL > CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROVINCIAL. JURISPRUDENCIA. APARTAMIENTO

CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. ADMISIBILIDAD. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROVINCIAL. JURISPRUDENCIA. APARTAMIENTO. SENTENCIA DEFINITIVA. EJECUCION

FISCAL. DEMANDADA. VIA RECURSIVA.

Este Tribunal, junto con todo el ordenamiento jurídico santafesino, ha interpretado el artículo 141 del Código Fiscal en el sentido de que cuando la norma invocada reza que la sentencia de remate será recurrible, se debe interpretar en armonía con la ley de rito local y las demás leyes que rigen los apremios, que prevén la apelabilidad sólo para el actor, de modo tal que luego de la sentencia de remate queda expedita para el accionado -en caso de sentencia definitiva- únicamente la vía extraordinaria local prevista en la ley 7055 y por tal razón la segunda parte del artículo 141 refiere al modo y efecto de concesión del recurso extraordinario previsto en la referida ley; y en el caso, la Jueza de Primera Instancia de Ejecución Civil denegó por inadmisibles el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada contra la sentencia de remate, con fundamento en la falta de carácter de definitivo de la sentencia dictada en tanto admitía la interposición de recursos ordinarios, oponiéndose así a la citada jurisprudencia. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 289, p 283; T 293, p 240. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Fiscal de Santa Fe, artículos 141 y 143; Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 509; Ley 5066, artículo 26; Ley 7055. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez, Spuler y Weder)

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > INADMISIBILIDAD

Tesouro > VOTO EN DISIDENCIA

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > SENTENCIA NO DEFINITIVA

Tesouro > SENTENCIA NO DEFINITIVA

Tesouro > APREMIO FISCAL > EJECUCION

Tesouro > EJECUCION FISCAL

Tesouro > DEMANDADO

Tesouro > JUICIO > DEMANDADO

Tesouro > PARTES EN EL PROCESO > DEMANDADO

Tesouro > VIA RECURSIVA

Tesouro > REGIMEN PROVINCIAL

Tesouro > REGIMEN MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. INADMISIBILIDAD. VOTO EN DISIDENCIA. SENTENCIA NO DEFINITIVA. EJECUCION FISCAL. DEMANDADA. VIA RECURSIVA. REGIMEN PROVINCIAL. REGIMEN MUNICIPAL. DIFERENCIAS.

En orden a las instancias recursivas de los apremios fiscales, cabe apuntar que existen discrepancias sustanciales entre el régimen provincial y municipal, en tanto el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe concretamente dispone en su artículo 141 que la sentencia de remate será recurrible, y que los recursos se concederán en relación y con efecto no suspensivo para el ejecutado; en cambio el artículo 26 de la Ley de Cobro de créditos fiscales por parte de municipios, dispone que la sentencia de remate sólo es apelable por el actor, por lo tanto resulta claro para el presente caso que la instancia jurisdiccional de revisión ordinaria fue soslayada por el recurrente, y ello bajo ningún punto de vista puede ser convalidado en esta instancia; siendo prueba de ello que absolutamente todas las ejecuciones fiscales promovidas por la Administración Provincial de Impuestos que han llegado a esta Corte, lo han hecho desde las respectivas Salas civiles y comerciales y nunca de un Juzgado de primera instancia, tal como pretende ahora hacer valer el recurrente, por lo que el presente recurso deberá ser declarado inadmisibles por tratarse de una sentencia no definitiva ni equiparable a tal. (Del voto en disidencia del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 172, p 389; T 212, p 125; T 223, p 489; T 224, p 455; T 238, p 168; T 243, p 151; T 249, p 471; T 259, p 139; T 260, p 327; T 269, p 322; T 312, p 195; T 328, p 205; 2025:344. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Fiscal de Santa Fe, artículo 141; Ley 5066, artículo 26.

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > INADMISIBILIDAD
Tesouro > VOTO EN DISIDENCIA
Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > SENTENCIA NO DEFINITIVA
Tesouro > SENTENCIA NO DEFINITIVA
Tesouro > APREMIO FISCAL > EJECUCION
Tesouro > EJECUCION FISCAL
Tesouro > DEMANDADO
Tesouro > JUICIO > DEMANDADO
Tesouro > PARTES EN EL PROCESO > DEMANDADO
Tesouro > VIA RECURSIVA
Tesouro > REGIMEN PROVINCIAL
Tesouro > REGIMEN MUNICIPAL
Tesouro > CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROVINCIAL > JURISPRUDENCIA
Tesouro > ERROR
Tesouro > EXPEDIENTE > REMISION

CONSTITUCIONAL - PROCESAL - TRIBUTARIO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. INADMISIBILIDAD. VOTO EN DISIDENCIA. SENTENCIA NO DEFINITIVA. EJECUCION FISCAL. DEMANDADA. VIA RECURSIVA. REGIMEN PROVINCIAL. REGIMEN MUNICIPAL. DIFERENCIAS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROVINCIAL. JURISPRUDENCIA. ERROR. EXPEDIENTE. REMISION AL JUZGADO DE ORIGEN. NUEVO PLAZO PARA APELAR.

El fragmento traído por el recurrente en su recurso de queja se trata de un párrafo que por error formó parte de la aludida resolución de esta Corte, puesto que lo que allí se debatía estaba enmarcado dentro de un apremio fiscal provincial promovido por la A.P.I. y se le dio tratamiento de apremio municipal, citando incluso erróneamente la ley de cobro de créditos fiscales por parte de municipios y no la que hubiese correspondido; por lo que considero que corresponde asumir que el referido error pudo provocar en la parte que ahora recurre una expectativa de concurrir válidamente ante esta Corte y, por lo tanto, entiendo que corresponderá remitir copia de la presente resolución junto con las actuaciones principales al Juzgado de Primera Instancia correspondiente para que se habilite excepcionalmente un nuevo plazo para que la ejecutada pueda seguir la vía recursiva correspondiente ante la Cámara de conformidad al artículo 141 del Código Fiscal Provincial. (Del voto en disidencia del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler) – CITAS: CSJStaFe: AyS T 289, p 283. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 5066, artículo 26; Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe.

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > INADMISIBILIDAD
Tesouro > VOTO EN DISIDENCIA
Tesouro > CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROVINCIAL > JURISPRUDENCIA
Tesouro > ERROR

CONSTITUCIONAL

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. INADMISIBILIDAD. VOTO EN DISIDENCIA. CORTE DE SUPREMA DE JUSTICIA PROVINCIAL. JURISPRUDENCIA. ERROR.

Si la justicia es “corrección” -tal como enseña el jurista alemán Robert Alexy- y toda sentencia debe formular necesariamente una “pretensión de corrección”, la idea misma de considerar aplicable una sentencia a pesar de ser evidentemente errónea resulta inconciliable con la premisa desde la cual se desarrolla la labor de adjudicación judicial, y se traduce -incluso- en una suerte de renuncia consciente a la justicia. (Del voto en disidencia del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler)

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > PROCEDENCIA > DERIVACION NO RAZONADA DEL DERECHO VIGENTE
Tesouro > APREMIO FISCAL > EJECUCION
Tesouro > EJECUCION FISCAL
Tesouro > TITULO EJECUTIVO
Tesouro > TITULO EJECUTIVO > REQUISITOS
Tesouro > CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL > CRITERIO RECTOR

CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDENCIA. DERIVACION NO RAZONADA DEL DERECHO VIGENTE. EJECUCION FISCAL. TITULO EJECUTIVO. FORMACION. FORMALIDADES. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL. CRITERIO RECTOR.

La Jueza realizó un análisis parcializado del procedimiento de formación del título ejecutivo, omitiendo el cotejo del mismo a la luz de la normativa específica que rige el caso, resultando aplicable en estos supuestos la línea jurisprudencial emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que los tribunales inferiores se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos; y al respecto es importante destacar que la incursión en el proceso de gestación del título, no se lleva a cabo para evaluar la legitimidad causal de la obligación -cuestión invalorable en el juicio ejecutivo- sino para corroborar el cumplimiento de las formalidades que regulan la formación del título. - CITAS: CSJN: Fallos: 312:178; 316:2764; 318:1151.

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > PROCEDENCIA > DERIVACION NO RAZONADA DEL DERECHO VIGENTE
Tesouro > APREMIO FISCAL > EJECUCION
Tesouro > EJECUCION FISCAL
Tesouro > INMUEBLE > MEJORAS
Tesouro > CODIGO FISCAL DE SANTA FE
Tesouro > APREMIO FISCAL > PROCEDIMIENTO EJECUTIVO
Tesouro > PROCEDIMIENTO FISCAL

CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDENCIA. DERIVACION NO RAZONADA DEL DERECHO VIGENTE. EJECUCION FISCAL. INMUEBLE. MEJORAS. CODIGO FISCAL. PROCEDIMIENTO ESPECIFICO.

Surge del Código Fiscal que el Legislador ha previsto un procedimiento específico con relación a la incorporación de mejoras, cuya evaluación resultaba necesaria y respecto de la cual la Jueza omitió toda consideración, y tal circunstancia resulta suficiente a los fines de declarar la procedencia del presente recurso, sin necesidad de ingresar al análisis de otras cuestiones, desde que las deficiencias apuntadas resultan suficientes para evidenciar que éste no cumple con la exigencia constitucional de motivación suficiente e impiden su mantenimiento como acto judicial válido. - CITAS: AyS, T 170, p 336; T 177, p 117; T 216, p 396. - RERENCIAS NORMATIVAS: Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe, artículos 62, 63, 65 y 169.

Texto del fallo

T. 2026, SENTENCIA NRO. 191

En la Provincia de Santa Fe, a los siete días del mes de abril del año dos mil veintiséis, los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe doctores Jorge Camilo Baclini, Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler, Rubén Luis Weder y Margarita Elsa Zabalza bajo la presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, acordaron dictar sentencia en los autos caratulados "ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS contra VANZINI SRL -APREMIOS FISCALES- (CUIJ 21-13915214-7) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-13915214-7). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Erbetta, Falistocco, Zabalza, Baclini, Gutiérrez, Spuler y Weder.

A la primera cuestión, -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

Por resolución de fecha 29 de noviembre de 2024 (A. y S. n° 960, año 2024) esta Corte -por mayoría- admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada, por entender que las postulaciones del impugnante, invocando apartamiento normativo y jurisprudencial aplicables al caso en relación a la vía impugnativa intentada -recurso de inconstitucionalidad-, contaban con suficiente asidero en las constancias de la causa e importaban articular con seriedad planteos con idoneidad suficiente como para operar la apertura de la instancia de excepción.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado ahora con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión a la que arribó la Corte -por mayoría- en aquella oportunidad, oído lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 131/134 vto.).

Ello así al comprobar que este Tribunal ha interpretado, junto con todo el ordenamiento jurídico santafesino, el artículo 141 del Código Fiscal en el sentido de que cuando "la norma invocada... reza 'La sentencia de remate será recurrible', se debe interpretar en armonía con la ley de rito local (art. 143, Cód. Fiscal y 509, C.P.C.C.S.F.) y las demás leyes que rigen los apremios (art. 26, ley 5066), que prevén la apelabilidad sólo para el actor, de modo tal que luego de la sentencia de remate queda expedita para el accionado -en caso de sentencia definitiva- únicamente la vía extraordinaria local prevista en la ley 7055 y por tal razón la

segunda parte del artículo 141 refiere al modo y efecto de concesión del recurso extraordinario previsto en la ley 7055" (Autos "ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS contra BUSLOWICZ, FERNANDO PABLO -EJECUCIÓN FISCAL-", A. y S. T. 289, pág. 283; y especialmente A. y S. T. 293, pág. 240 del 22.10.2019 -punto 1.2).

Y, en el caso, la Sra. Jueza de Primera Instancia de Ejecución Civil de la 1era Circunscripción denegó por inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada contra la sentencia de remate, con fundamento en la falta de carácter de definitivo de la sentencia dictada en tanto "admitía la interposición de recursos ordinarios" (art. 141 del Código Fiscal), oponiéndose así a la citada jurisprudencia.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Zabalza y el señor Ministro doctor Baclini expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

1. Surge de las constancias de la causa, en lo que resulta de interés, que la Administración Provincial de Impuestos interpuso una demanda de ejecución fiscal contra Vanzini S.R.L. procurando el cobro de una deuda de impuesto inmobiliario correspondiente a los años 2012 a 2017.

Por su parte, la sociedad demandada articuló su defensa aduciendo excepción de inhabilidad de título y defecto legal en el modo de proponer la demanda; a su vez, de modo subsidiario, opuso prescripción liberatoria de los períodos que se le pretendían cobrar.

Contestadas las excepciones por la API (v. fs. 26/37), por decisión de fecha 03.10.2023, el Juzgado de Primera Instancia de Circuito de Ejecución Civil de la Primera Nominación de la ciudad de Rosario resolvió rechazar las excepciones opuestas por la sociedad demandada y, en consecuencia, mandó a llevar adelante la ejecución contra bienes de VANZINI SRL hasta que la actora perciba el importe íntegro de su crédito (v. fs. 97/104).

2. Contra dicho decisorio, la demandada interpuso directamente un recurso de inconstitucionalidad (v. fs. 106/118) con fundamento en que la sentencia es arbitraria por apartarse manifiestamente del texto expreso de la ley, al haber reconocido supuestamente la inhabilidad de título formativo de la liquidación y, sin embargo, concluir en una sentencia condenatoria.

A su vez, dijo que la magistrada incurrió en un grave error en el encuadramiento fáctico y legal del caso, lo cual llevó a un arrasamiento de las pruebas concluyentes rendidas en autos,

implicando un palmario vicio de gravedad constitucional.

Resume el conflicto resaltando que se interpretó de manera equivocada el extracto de dominio acompañado al considerarlo como una inscripción de boletos de compraventa, lo cual -según indica- es falso. Explicó que esa consideración conlleva consecuencias para el análisis de la procedencia de la ejecución hacia su parte por inexistencia de deuda y falta de legitimidad al estar el lote a nombre de terceras personas desde el año 1978.

Agrega también que se interpretó que hubo una determinación de deuda en fecha 15.03.2019 cuando el propio informe por oficio del SCIT indicó que se procedió al desglose (anulación), enumerando luego cada uno de los lotes y nuevas partidas.

A su vez, advirtió que a pesar de estar viciado su domicilio en el proceso administrativo, se lo consideró válido aún cuando de las probanzas surge que su parte nunca fue notificada de la supuesta deuda.

3. Corrido el traslado a la parte actora (A.P.I.) por decreto de foja 105, se presentó su apoderado e interpuso revocatoria y apelación en subsidio.

Para ello, explicó que en el presente caso no quedan dudas de que se rige por el Código Fiscal de la Provincia y que ello podía corroborarse incluso por el primer decreto de trámite en donde se dispuso "tener por iniciada demanda de ejecución fiscal en los términos del artículo 127 y siguientes del Código Fiscal".

Relató que luego de tramitada la causa y dictada la correspondiente sentencia de primera instancia, la demandada interpuso contra dicho decisorio un recurso de inconstitucionalidad manifestando que el carácter definitivo del fallo de primera instancia se configuraba por estar "vedado" el recurso de apelación.

Frente a ello, la Administración Provincial de Impuestos advirtió que el recurso de la demandada resultaba improcedente y sus afirmaciones erróneas puesto que el artículo 141 del Código Fiscal dispone precisamente lo contrario en cuanto ordena que "la sentencia de remate será recurrible. Los recursos se concederán en relación y con efecto no suspensivo para el ejecutado".

4. La Jueza de primera instancia, mediante resolución n° 2112 de fecha 24.11.2023, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada -ejecutada- por entender que la sentencia recurrida no se trataba de una sentencia definitiva por cuanto admitía la interposición de recursos ordinarios de conformidad con la norma que regulaba el caso, es decir, el artículo 141 del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe.

5. Así las cosas, interpuesto ante esta Corte el recurso de queja por denegación del recurso de

inconstitucionalidad por parte de la sociedad demandada, si bien me pronuncié por su rechazo en el entendimiento de que el pronunciamiento no constituía una sentencia definitiva, la mayoría de este Cuerpo mediante resolución de fecha 26.11.2024 (Sentencia nro. 960 del año 2024) admitió la queja deducida, considerando provisoriamente que las alegaciones de la accionada importaban planteos que podían llegar a configurar hipótesis de arbitrariedad de sentencias.

6. El nuevo examen de admisibilidad que corresponde realizar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce -coincidiendo con lo dictaminado por el señor Procurador General- a ratificar mi postura e insistir en que el presente recurso debe declararse inadmisibile, anticipando -de este modo- que votaré por la negativa a la presente cuestión.

Ello al entender que el artículo 1 de la ley 7055 establece, entre otros presupuestos indispensables para que la resolución pueda ser objeto del recurso de inconstitucionalidad local, que se trate de una sentencia definitiva o auto equiparable a tal.

En dicho sentido, como se dijo, la Jueza al analizar los requisitos estrictamente formales de la presentación del recurso de inconstitucionalidad, consideró que al encontrarse frente a un reclamo efectuado por la actora enmarcado en las disposiciones del Código Fiscal de nuestra provincia (normativa que reguló el trámite expresamente incluso en el primer decreto de la causa) la sentencia dictada de ninguna manera podía ser considerada "definitiva" o equiparable a tal, puesto que admitía la interposición de los recursos ordinarios en consonancia con lo normado por el artículo 141 del Código Fiscal.

Dicho argumento debe ser indudablemente convalidado en esta instancia.

La recurrente intentó acreditar la definitividad del pronunciamiento de primera instancia afirmando que "contra el auto dictado por éste Juzgado, encontrándose vedado el recurso de apelación, queda habilitada la interposición del Recurso de Inconstitucionalidad a tenor de la ley 7055, que por el presente se deduce" (foja 107 vta.); y luego al referir que "la resolución de este Juzgado -de primera instancia- es definitiva... e insusceptible de reparación ulterior" como así también cuando sostuvo que la misma "emana del último Tribunal de la causa, lo que es indudable en el caso de apremio fiscal" (foja 113).

Estos erráticos argumentos, que configuraron una especie de salto de instancia, fueron advertidos por la Jueza de grado como argumento principal para denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, en orden a las instancias recursivas de los apremios fiscales, cabe apuntar que

existen discrepancias sustanciales entre el régimen provincial y municipal.

Una de sus principales diferencias es que el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe concretamente dispone en su artículo 141 que: "La sentencia de remate será recurrible. Los recursos se concederán en relación y con efecto no suspensivo para el ejecutado"; en cambio, el artículo 26 de la Ley de Cobro de créditos fiscales por parte de municipios (5066), dispone que "La sentencia de remate sólo es apelable por el actor".

Por lo tanto, resulta claro para el presente caso que la instancia jurisdiccional de revisión ordinaria (cfr. artículo 141 del Código Fiscal provincial) fue soslayada por el recurrente; y ello bajo ningún punto de vista puede ser convalidado en esta instancia.

Prueba de ello es que absolutamente todas las ejecuciones fiscales promovidas por la Administración Provincial de Impuestos que han llegado a esta Corte, lo han hecho desde las respectivas Salas civiles y comerciales y nunca de un Juzgado de primera instancia, tal como pretende ahora hacer valer el recurrente (v. desde antaño "API contra SASSIA" Reg. A. y S. T° 172, p. 389; "API contra REYNOSO" Reg. A. y S. T° 212, p. 125; "API contra POSSETINI" Reg. A. y S. T° 223, p. 489; "API contra SCAVUZZO" Reg. A. y S. T° 224, p. 455; "API contra PFAFFEN" Reg. A. y S. T° 238, p. 168; "API contra CITIBANK" Reg. A. y S. T° 243, p. 151; "API contra JACQUELIN" Reg. A. y S. T° 249, p. 471; "API contra STREET" Reg. A. y S. T° 259, p. 139; "API contra EL BUEN GUSTO" Reg. A. y S. T° 260, p. 327; "API contra REALE" Reg. A. y S. T° 269, p. 322; "API contra ORG. DISTRIBUIDORA LITORAL" Reg. A. y S. T° 312, p. 195; "API contra FRIGORIFICO LITORAL ARGENTINO" Reg. A. y S. T° 328, p. 205; e incluso más recientemente "API contra CREMER", Sentencia nro. 344, año 2025).

En función de lo expuesto, el presente recurso deberá ser declarado inadmisible por tratarse de una sentencia no definitiva ni equiparable a tal.

Por lo demás, aunque lo dicho hasta aquí basta para desestimar la presentación bajo análisis, cabe hacer una mención especial a la resolución que cita la recurrente mediante la cual esta Corte rechazó una queja en otro apremio fiscal promovido por la Administración Provincial de Impuestos (v. Reg. A. y S. T° 289, p. 283).

Y ello porque, aunque no correspondería su tratamiento por resultar este argumento una evidente reflexión tardía de la parte recurrente -con la que intentó recién en su queja mejorar la fuerza de su recurso de inconstitucionalidad- las consideraciones que a continuación se exponen podrán servir para evitar confusiones ante casos futuros que presenten cierta analogía.

En efecto, si bien es cierto que este Tribunal ha sostenido que "el auto que hace lugar al

apremio es sentencia definitiva a los fines de la interposición del recurso de inconstitucionalidad, ya que siendo vencido el demandado, la resolución que manda llevar adelante la ejecución no resulta susceptible de impugnación mediante remedios ordinarios (artículo 509 del C.P.C.C.)", no puede desconocerse que dicha doctrina no atañe a los apremios fiscales incoados por la Provincia (en este caso, Administración Provincial de Impuestos), los cuales se rigen -como ya se dijo y ahora se reitera- por su propia normativa fiscal (Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe, particularmente su artículo 141).

De tal modo, entiendo que el fragmento traído por el recurrente en su recurso de queja se trata de un párrafo que por error formó parte de la aludida resolución de esta Corte, puesto que lo que allí se debatía estaba enmarcado dentro de un apremio fiscal "provincial" promovido por la A.P.I. y se le dio tratamiento de apremio "municipal", citando incluso erróneamente la ley de cobro de créditos fiscales por parte de municipios (artículo 26 de la ley 5066) y no la que hubiese correspondido (Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe).

Lo propio ocurrió luego con la denegatoria del recurso extraordinario federal en esa misma causa, tratandose de un error que merece en esta oportunidad ser subsanado.

A pesar de ello, se advierte que si a dichos obiters dictums se los quitan de aquellas resoluciones no modificaría en nada la solución propiciada en orden al rechazo, puesto que a renglón seguido se explicó que el recurso no podía prosperar debido a que "los argumentos de los sentenciantes no logran ser derribados por el recurrente con sus genéricas alegaciones sin demostrar irrazonabilidad en lo resuelto por la alzada en cuanto a que -en definitiva- desestimó la excepción de prescripción interpuesta con sustento en criterios jurisprudenciales seguidos por este Tribunal".

En suma, el párrafo del fallo de esta Corte transcripto en el recurso directo de la parte demandada, de ninguna manera podrá servir como argumento para eludir la vía recursiva correcta que la ley pone en manos de las Cámaras de apelación de modo exclusivo y que esta Corte convalidó en todos sus precedentes en donde las sentencias recurridas superaban el valladar de definitividad al provenir correctamente -como se dijo y ahora se reitera- de las Cámaras correspondientes.

Sin embargo, considero que corresponde asumir que el referido error pudo provocar en la parte que ahora recurre una expectativa de concurrir válidamente ante esta Corte y, por lo tanto, entiendo que corresponderá remitir copia de la presente resolución junto con las actuaciones principales al Juzgado de Primera Instancia correspondiente para que se habilite excepcionalmente un nuevo plazo para que la ejecutada pueda seguir la vía recursiva

correspondiente ante la Cámara de conformidad al artículo 141 del Código Fiscal Provincial.

En conclusión, no se puede dejar de advertir que se trató de un error cuya evidencia es de igual magnitud que su necesaria aclaración, toda vez que mantenerse en el mismo implicaría, a criterio de los recurrentes, darle jurisdicción directa a esta Corte -cuyo carácter excepcional se encuentra indiscutido- para revisar todos los apremios fiscales promovidos por la Administración Provincial de Impuesto sin transitar la vía recursiva dispuesta por la ley aplicable.

En efecto, la materia en debate incluso torna aún más imperiosa la inadmisibilidad de esta cuestión si se repara en la posición institucional que tiene esta Corte como máximo Tribunal en el orden santafesino, con notoria especialidad cuando se trata -como en el presente- de cuestiones que remiten al examen de normas de derecho público local, respecto de las cuales -como es sabido- esta Corte inviste el carácter de intérprete final (ver, en tal sentido, esta Corte en "Rodriguez", A. y S. T. 203, p. 128; entre otros).

Advertir esta confusión cobra mayor significado si se reconoce y respeta la autoridad y el poder jurisdiccional que la Constitución de la Provincia le ha acordado a esta Corte, posición que se traduce -entre otros aspectos- en el hecho de que sus fallos han de ser lealmente seguidos por los tribunales de las instancias inferiores.

Es así que, tal como enseña un memorable voto de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los Tribunales Supremos no somos definitivos porque seamos infalibles pero podemos ser infalibles tan solo porque somos definitivos (ver "Brown v. Allen", 344 US 443 [1953], opinión concurrente del Juez Jackson); allí considero que radica la importancia de rectificar nuestras propias decisiones en caso de mostrarse equivocadas.

Sin ir tan lejos incluso -tan solo unos meses atrás- nuestro cimero Tribunal nacional haciéndose eco de lo antedicho abandonó un precedente suyo al considerar que el mismo contenía "un error grave y claro", reconociendo que "los tribunales no son omniscientes y como cualquier otra institución humana, también pueden aprovechar del ensayo y del error, de la experiencia y de la reflexión. Por cierto, que para que ello suceda [...] tienen que existir 'causas suficientemente graves, como para hacer ineludible tal cambio de criterio [...] entre las cuales se encuentra el reconocimiento del carácter erróneo de la decisión' (v. CSJN en "Acevedo", Fallos 348:189, en particular el considerando 20 del voto de los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz, en el cual dejan sin efecto el criterio del precedente "Pinturas y Revestimientos", Fallos: 337:315 y subsidiariamente el de los precedentes "Sullivan", Fallos: 335:2019; "Clínica Marini SA", Fallos 336:908; entre otros).

Por lo tanto, si la justicia es "corrección" -tal como enseña el jurista alemán Robert Alexy- y toda sentencia debe formular necesariamente una "pretensión de corrección", la idea misma de considerar aplicable una sentencia a pesar de ser evidentemente errónea resulta inconciliable con la premisa desde la cual se desarrolla la labor de adjudicación judicial, y se traduce -incluso- en una suerte de renuncia consciente a la justicia.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votó en igual sentido.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Weder dijo:

Esta Corte, por mayoría, admitió la queja deducida por la sociedad demandada, considerando -provisoriamente- que sus alegaciones importaban planteos que podían llegar a configurar una hipótesis de arbitrariedad de sentencia.

El nuevo examen de admisibilidad que corresponde realizar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce -coincidiendo con lo dictaminado por el señor Procurador General- a rectificar tal postura por entender que no nos encontramos frente a una sentencia definitiva o equiparable a tal.

En efecto, del estudio del expediente principal que tengo a la vista, surge que no se encuentra controvertido por las partes que la norma que rige el presente caso es el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe.

Dicho digesto resulta claro en su artículo 141 en cuanto dispone que "La sentencia de remate será recurrible. Los recursos se concederán en relación y con efecto no suspensivo para el ejecutado".

Por lo tanto, coincido con el voto del doctor Gutiérrez en cuanto a que no quedan dudas de que la sentencia de la Jueza de primera instancia admitía los recursos ordinarios ante la Cámara correspondiente de manera previa y obligatoria antes de concurrir a esta Corte; y eso resulta más que suficiente para declarar inadmisibile el presente recurso.

Voto, pues, por la negativa.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Ejecución Civil y Comercial N° 1 de Rosario, la Administración Provincial de Impuestos entabló ejecución fiscal contra Vanzini S.R.L. persiguiendo el cobro de la suma de \$382.458,48 en concepto de Impuesto Inmobiliario, Partida N° 150309-200276-0308-4, períodos 1/2012 a 6/2017, con más intereses y las costas del proceso (fs. 3/5 vto.).

Afirmó que los títulos acompañados son los que según dispone el artículo 129 del Código Fiscal, traen aparejada ejecución; y que los antecedentes obran en el expediente administrativo N° 13302-1018635-1.

2. Citada de remate la accionada compareció y opuso excepciones de inhabilidad de título, defecto legal en el modo de proponer la demanda y subsidiariamente prescripción (fs. 12/19 vto.).

En apoyo de su postura, adujo "que el título referido no reviste carácter de título ejecutivo, por cuanto el API emitió un título o liquidación inhábil, imperfecto, que se basa en una partida anulada"; que "ninguna deuda fue reclamada ni remitió boletas de pago de una partida anulada... a su domicilio fiscal"; que tal omisión privó a su parte de ejercer su derecho de defensa.

Afirmó que se violó el procedimiento que regula la confección del título, resultando en consecuencia inexigible la deuda reclamada.

Sostuvo que la demanda no se encuentra debidamente instaurada dado que se basa en un certificado de deuda que no se trata de un título hábil por cuanto no puede traslucirse su legitimidad si la partida sobre la cual se construye se encuentra anulada, cuando el título que se ejecuta debe ser incólumne, indudable y bastarse a sí mismo por ser un instrumento de formación unilateral sin control del contribuyente.

Esgrimió que "de una partida anulada no puede generarse un certificado válido, mucho menos determinarse cuál o cuáles son los bienes, ubicación del lote o manzana para su individualización".

Expresó que la actora ha incumplido básicas obligaciones derivadas de su diligencia para establecer una deuda y emitir un título válido violentando derechos de defensa de su parte.

Finalmente, en subsidio, opone excepción de prescripción liberatoria y ofrece pruebas.

3. La actora se opuso a las excepciones planteadas, solicitando su expreso rechazo (fs. 26/37).

Para así solicitarlo, indicó que los presentes títulos ejecutivos "gozan de presunción de legitimidad propia de los actos administrativos" y que "la pretendida discusión sobre la causa de la obligación que trata de introducir el demandado en el presente juicio no resulta procedente".

Sostuvo que "si bien la partida fue anulada, ello es así a partir del 15 de marzo de 2019"; que "no implica que la partida no tenga deuda anterior"; que "el impuesto inmobiliario es un tributo de emisión... de liquidación administrativa"; que al ser un impuesto de emisión no requiere intimación previa a la iniciación de la ejecución, ni instrucción de sumario previo;

que "en fecha 14/03/2019 el SCIT realiza la detección y carga de mejoras incorporadas en el inmueble de autos"; que el "SCIT tiene facultad para proceder a la carga masiva de mejoras a fin de actualizar la parcela" y que en autos "se reclama deuda por impuesto inmobiliario por mejoras no declaradas por la demandada, la[s] cuales fueron detectadas y registradas por el SCIT en fecha 14/03/2019"; oponiéndose asimismo a la excepción de prescripción, por los motivos que indica.

4. La Jueza de baja instancia rechazó las excepciones opuestas por la parte demandada y en consecuencia mandó a llevar adelante la ejecución contra los bienes de Vanzini SRL hasta que la actora perciba el importe de su crédito por la suma de \$382.458,48 (fs. 97/104 vto.).

5. Contra tal pronunciamiento deduce Vanzini S.R.L recurso de inconstitucionalidad.

Se agravia de que la Magistrada incurrió en error en el encuadramiento fáctico y legal del caso, que llevó a un arrasamiento de las pruebas concluyentes rendidas en autos, implicando un palmario vicio de gravedad constitucional.

Resalta que se interpretó de manera equivocada el extracto de dominio acompañado al considerarlo como una inscripción de boletos de compraventa, lo cual -según indica- es falso.

Dice que esa consideración conlleva consecuencias para el análisis de la procedencia de la ejecución hacia su parte por inexistencia de deuda y falta de legitimidad al estar el lote a nombre de terceras personas desde el año 1978.

Indica que, la liquidación de las boletas aportadas por API indican domicilio Pje. Santa Matilde 3621 de Rosario, lo mismo que el resumen de deuda y cada una de las partidas, pero que la API dispone en la liquidación uno distinto en calle del ceibal 50 de Rosario, apartándose del artículo 29 del Código Fiscal.

Afirma que ello demuestra que su parte nunca tuvo la posibilidad de contradecir un proceso administrativo de mejoras en 15 lotes que han sido vendidos con boleto de compraventa y en dos casos transferidos por escritura pública.

6. Le asiste razón a la recurrente en cuanto postula la descalificación constitucional del decisorio cuestionado.

Ello así, por cuanto de la lectura del fallo atacado, en confrontación con los agravios esgrimidos, surge que dicho pronunciamiento no satisface adecuadamente el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable, ya que bajo la apariencia de fundamentación contiene afirmaciones dogmáticas que resultan insuficientes para sustentar constitucionalmente lo resuelto al no encontrar debido apoyo en las pruebas aportadas y demás constancias de la causa, a la luz del derecho que rige el caso.

En efecto, la Jueza realizó un análisis parcializado del procedimiento de formación del título ejecutivo, omitiendo el cotejo del mismo a la luz de la normativa específica que rige el caso.

En estos supuestos, resulta aplicable la línea jurisprudencial emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que "los tribunales inferiores se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos" (Fallos: 312:178; 316:2764; 318:1151; entre otros).

Y al respecto es importante destacar que la incursión en el proceso de gestación del título, no se lleva a cabo para evaluar la legitimidad causal de la obligación -cuestión invalorable en el juicio ejecutivo- sino para corroborar el cumplimiento de las formalidades que regulan la formación del título.

De este modo resulta imprescindible verificar la virtualidad ejecutiva del certificado de deuda, cuando se invoca el incumplimiento de las formalidades esenciales que hacen a su otorgamiento o exigibilidad.

Esta conclusión no vulnera la presunción de legitimidad de los actos de la administración, ni pone en entredicho su ejecutoriedad ya que, lo que el Magistrado debe investigar en razón de las excepciones y defensas opuestas, es la regularidad o irregularidad formal de la expresión de voluntad de la administración, no su contenido.

Es decir, analizar el proceso de formación del título ejecutivo en sus aspectos formales, importa una actividad propia del proceso de ejecución, no importando ello ingresar a la causa de la obligación, sino sólo controlar el derecho del fisco acreedor de reclamar el cobro por la vía ejecutiva.

De ahí que el examen del título tiende no sólo a asegurar las formas extrínsecas, sino que debe asimismo abarcar las circunstancias de haberse o no observado el procedimiento que la ley impone como previo a su exigibilidad, lo cual de modo alguno significa -se reitera- avanzar sobre la causa de la obligación.

Es por ello que no puede convalidarse un pronunciamiento que ha realizado un análisis parcializado de una cuestión decisiva con el argumento de que en un juicio de apremio fiscal no se admite la discusión sobre el origen del crédito, eludiendo así el control de este importante elemento del acto administrativo -procedimiento de formación del título- que se pretende opere como título ejecutivo base del apremio (cfr. "Municipalidad de San Lorenzo",

A. y S. T. 206, pág. 359; entre otros).

Con lo cual, y de conformidad a lo que surge de la jurisprudencia de este Cuerpo dictada con arreglo a inveterada jurisprudencia de la Corte nacional, habrá de analizarse la constitucionalidad de la solución dada al caso por la Magistrada de baja instancia en aplicación de las normas que rigen el caso, en tanto contienen las previsiones relativas a los tributos aquí en cuestión.

En el caso, se recuerda, la accionante reputó expedita la vía del apremio con fundamento en un título ejecutivo emitido de conformidad a una "liquidación administrativa" del impuesto inmobiliario "por mejoras no declaradas por la demandada, la[s] cuales fueron detectadas y registradas por el SCIT en fecha 14/03/2019".

Así las cosas, surge del Código Fiscal que el Legislador ha previsto un procedimiento específico con relación a la incorporación de mejoras (arts. 62, 65), cuya evaluación resultaba necesaria y respecto de la cual la Jueza omitió toda consideración, y tal circunstancia resulta suficiente a los fines de declarar la procedencia del presente recurso.

El artículo 62 del Código Fiscal dispone que "la Administración Provincial de Impuestos podrá disponer con carácter general, cuando así convenga y lo requiera la naturaleza del gravamen a recaudar, la liquidación administrativa tributaria sobre la base de datos aportados por los contribuyentes, responsables, terceros y/o los que ella posea"; y en el artículo 63 que "las liquidaciones a que se refiere el artículo anterior, de gravámenes, accesorios, actualizaciones y anticipos expedidas por la Administración Provincial de Impuestos mediante sistemas de computación, constituirán títulos suficientes a los efectos de la intimación de pago de los mismos si contienen, además de los otros requisitos y enunciaciones que les fueran propios, la sola impresión del nombre y del cargo del Administrador Provincial, los Administradores Regionales y/o los funcionarios que resulten competentes".

Luego, en el artículo 65, estatuye bajo el título "Liquidaciones de Impuesto Inmobiliario" que "cuando con motivo de liquidaciones practicadas por la Administración, se cuestione una modificación de los datos valuativos del inmueble, el contribuyente o responsable podrá manifestar su disconformidad ante el Organismo dentro de la temporalidad prevista por el artículo precedente y únicamente en el supuesto de no haberse planteado con anterioridad o simultáneamente dicha disconformidad ante el Servicio de Catastro e Información Territorial, en cuyo caso se tendrá por no presentado. Dentro de los cinco (5) días de recepcionada la impugnación, se otorgará intervención a dicho organismo a los fines de que dentro del término de ciento veinte (120) días dicte resolución respecto a la disconformidad planteada,

notificando el acto al contribuyente. Una vez firme la resolución, las actuaciones se remitirán en devolución a la Administración Provincial de Impuestos para que efectúe la liquidación del tributo"

Finalmente, en el Capítulo IV del título primero del Libro Segundo del Código Fiscal, en cuanto regula "la base imponible y del pago" del impuesto inmobiliario prevé que "Los valores asignados por valuaciones generales no serán modificados hasta la nueva valuación general salvo en los siguientes casos: a) Por subdivisión de los inmuebles; b) Por accesión o supresión de mejoras; c) Por error de clasificación o superficie; d) Por valorización o desvalorización proveniente de obras públicas, cambios de destino debidamente justificados o mejoras de carácter general. Los nuevos valores surtirán efectos impositivos desde el 1° de enero siguiente al año en que las circunstancias señaladas precedentemente los modifiquen y/o de la fecha que la Administración Provincial de Impuestos determine en función de lo informado por el Servicio de Catastro e Información Territorial según la normativa vigente y constancias del caso. Las valuaciones sobre toda nueva edificación, reconstrucción o refacción que se realice serán determinadas por el Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe. En ningún caso la API recargará con intereses y multas cuando la causa del error o demora le sea totalmente imputable a los Organismos del Estado (art. 169).

Como se advierte, estas normas regulan el régimen de las liquidaciones administrativas en los casos de modificación de los datos valuativos del inmueble por subdivisión, accesión o supresión de mejoras, cuyo análisis a la luz de la prueba rendida en autos resultaba necesaria y -se reitera- la Jueza omitió.

Lo dicho hasta aquí basta para descalificar en su totalidad el decisorio cuestionado sin necesidad de ingresar al análisis de otras cuestiones, desde que las deficiencias apuntadas resultan suficientes para evidenciar que éste no cumple con la exigencia constitucional de motivación suficiente e impiden su mantenimiento como acto judicial válido (cfr. criterio de A. y S., T. 170, pág. 336; T. 177, pág. 117; T. 216, pág. 396, entre otros), con costas.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

Debiendo expedirme sobre la procedencia atento al resultado arribado por la mayoría de esta Corte al tratar la primera cuestión -a pesar de haber votado la admisibilidad por la negativa-, coincido sustancialmente con la solución y fundamentos propuestos por el señor Ministro doctor Erbetta en el tratamiento de esta segunda cuestión.

Entiendo que ello es suficiente para concluir que la respuesta jurisdiccional brindada no

satisface el derecho a la jurisdicción del recurrente.

Por ello, voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler y Weder expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Erbetta dijo:

En atención al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento al respecto.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, la señora Ministra doctora Zabalza, el señor Ministro doctor Baclini, el señor Presidente doctor Gutiérrez, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Ministro doctor Weder, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que la cuestión referida sea nuevamente juzgada de acuerdo a lo dicho anteriormente.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, de lo que doy fe.

FDO. DIGITALMENTE: GUTIÉRREZ - BACLINI - ERBETTA - FALISTOCCO - SPULER - WEDER - ZABALZA - PORTILLA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la Primera Nominación de Rosario.